

RICARDO VELAZCO

La industria de palma aceitera se alista para devorar la selva. Los empresarios del rubro cuentan con un “embajador” con fajín. Durante una visita a Ucayali el pasado 27 de mayo el ministro de Agricultura, Ángel Manero, anunció “la multiplicación” de los cultivos de palma. “Tenemos que pensar en grande y soñar en grande. Afortunadamente las cosas se están dando. (...) Solo la palma aceitera va a hacer que Ucayali sea una potencia enorme. Podemos desarrollar más de 200 mil hectáreas de palma aceitera, el gobernador (Francisco Pezo) dice que posiblemente 240 mil”, dijo Manero, según un audio que obtuvo esta publicación. El evento que animó Manero fue organizado por Fuerza Popular.

El Ministerio de Agricultura, consultado para esta nota, dice que Manero no dijo lo que dijo y que las 240 mil hectáreas serían para varios cultivos alternativos. Lo cierto es que los coqueteos entre el ministro y las grandes empresas de palma aceitera comenzaron un mes antes del viaje a Ucayali.

A finales de abril el ministro se reunió con Alfonso Morante Chávez, directivo de la empresa Ocho Sur, uno de los pesos pesados de la palma aceitera, para “tratar temas relacionados al uso sostenible de los recursos”. También se citó con Óscar Neyra Saavedra, presidente de la Junta Nacional de Palma Aceitera (JUNPALMA). Este gremio tiene entre sus filas a la empresa Sol de Palma, una de las mayores exportadoras del aceite palmero. “La reunión fue para articular acciones que impulsen la promoción y comercialización de la palma aceitera”, señaló el Midagri en su cuenta de Twitter.

“Ese mismo mes la Federación de Comunidades Nativas del Distrito de Iparia (FECONADIP), en Ucayali, nos reportó que Ocho Sur estaba usando a líderes indígenas para promocionar la palma en cada distrito de la región como una buena alternativa. También ofrecían préstamos a las comunidades”, dice William Barbarán Gonzales, presidente de la red de comunicadores indígenas en Ucayali.

De concretarse los planes del ministro, la superficie de

El ministro de Agricultura, Ángel Manero. Digamos que tiene múltiples intereses.



Ministerio aceitado

► El ministro de Agricultura sigue haciendo de las suyas. Ahora se ha comprado la causa de la palma aceitera en Ucayali. El anuncio lo hizo en una reunión convocada por el fujimorismo

Extensas zonas de los bosques en Ucayali han sido arrasadas para el cultivo de palma aceitera. Ahora el zarpazo llegará a las 240,000 hectáreas.



las explotaciones de la palma aceitera se cuadruplicaría en la región.

Manero lanzó el plan de la palma aceitera durante un evento que organizó la congresista fujimorista Jeny López, una férrea defensora de la nueva ley forestal. En enero pasado López y otros 65 congresistas aprobaron la nueva norma por insistencia a pesar de las advertencias de

las Naciones Unidas y varios países de la Unión Europea que consideran que la ley favorece la deforestación y perjudica a las comunidades indígenas.

Manero agradeció la invitación al evento mostrando su apoyo a la nueva ley. “Sin duda respaldamos la ley 31973. No sólo la respaldamos sino que estamos apurándonos para que, en la segunda mitad de este año, empiece el progra-

ma fuerte de formalización. Ya estamos pidiendo el presupuesto para realizar esto. (...) Ya hemos elegido el camino de formalizar y no hay retroceso en eso”, dijo un entusiasmado Manero.

Después intervino la congresista López, quien, dirigiéndose al ministro, dijo: “Tenga la seguridad de que los agricultores de la Amazonía lo van a respaldar”.

El plan de “formalización” que el ministerio tiene en mente contempla la repartición de títulos de propiedad exprés donde antes se entregaban concesiones forestales. “El certificado le permite al Estado supervisar las unidades agrícolas y brindar asistencia técnica. Con el título se acaba esa fiscalización y se da paso a privados que pueden hacer lo que les venga en gana con el

FOTO ONG KENE

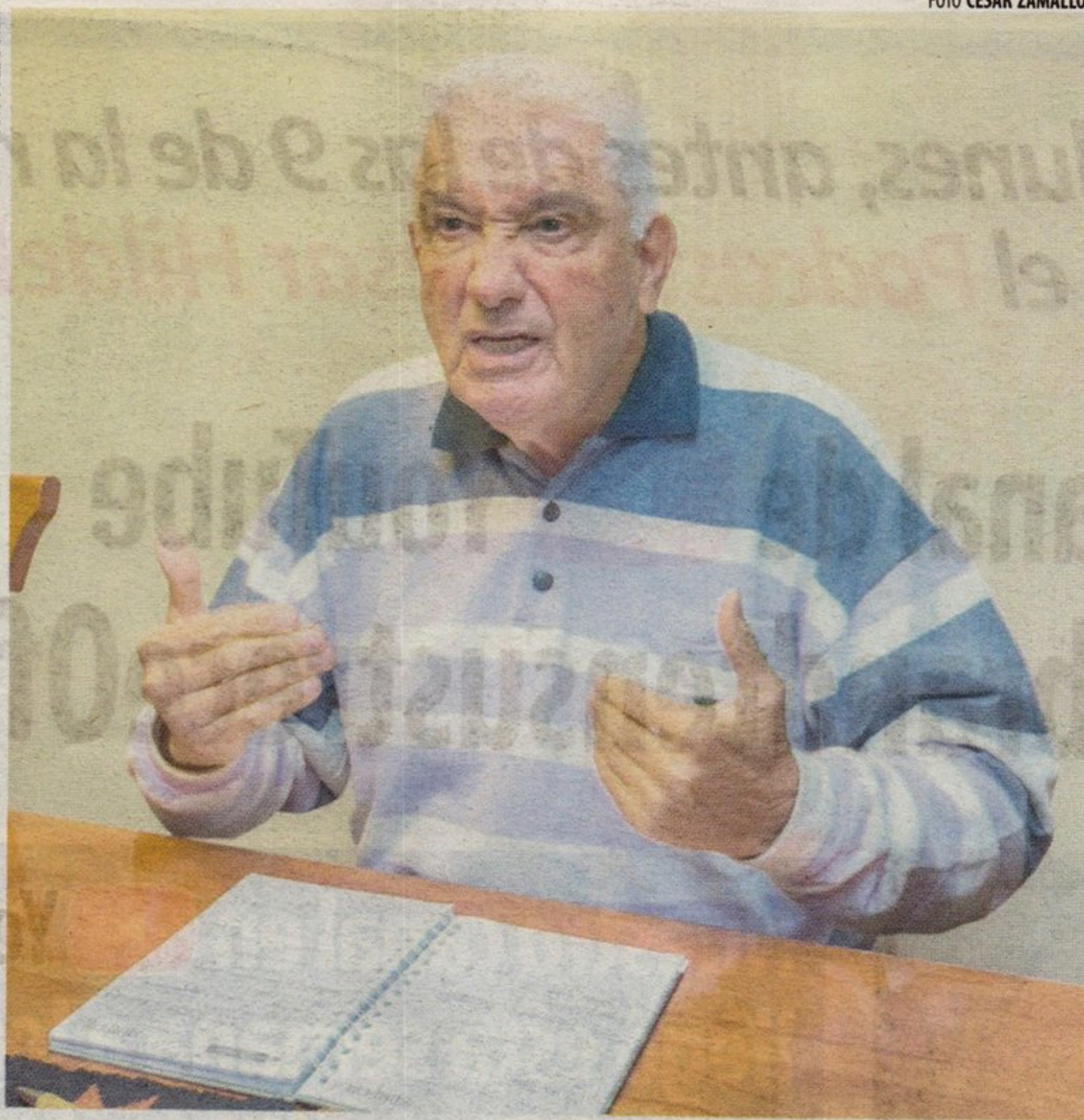


FOTO CÉSAR ZAMALLOA

El economista Alberto Gonzales-Zúñiga fue despedido de la dirección de Serfor el pasado 7 de mayo luego de oponerse a la nueva ley forestal que el Congreso aprobó.

las reuniones internas a Juan Manuel Benites, exministro, y Gustavo Suárez de Freitas, director de la ONG Earth Innovation Institute, para que intervengan en las discusiones", dice Gonzales-Zúñiga.

Benites es consultor del Grupo Palmas, el conglomerado de ocho empresas dedicadas a la palma aceitera que pertenece al Grupo Romero. Suárez Freitas organiza talleres junto con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El año pasado la embajada de ese país manifestó públicamente su respaldo a la empresa Ocho Sur.

Paralelamente, en el Congreso también se inició un proceso para modificar la ley forestal y promover las titulaciones sin ningún tipo de requisito legal. "Yo le expliqué dos veces a la congresista Jeny López que la entrega de títulos de propiedad promovería el tráfico de tierras y sobre eso iba a estar montado el narcotráfico", cuenta Gonzales-Zúñiga. El experto no fue escuchado y la ley se aprobó en enero pasado.

El exdirector de Serfor afirma que inmediatamente pidió autorización al ministerio para salir a los medios de comunicación y pronunciarse en contra de la nueva norma, pero le negaron el permiso.

A partir de entonces, dejaron de contar con él. "Ya no nos convocaban a las reuniones ministeriales y cuando solicité 26 millones de soles para avanzar con el programa de concesiones forestales, no me los dieron. Luego me sacaron cuando aún me quedaban 25 meses de gestión. La señora Dina Boluarte y su ministro optaron por esta medida arbitraria e ilegal. Siento que me despidió el Congreso y el Ejecutivo solo fue un instrumento", dice Gonzales-Zúñiga.

El impacto de la nueva ley ya empieza a sentirse. "Ayer me informaron que ya se está comenzando a entregar títulos de propiedad y hay gente que está siendo enviada a invadir bosques vírgenes y crear comunidades indígenas fantasmas para recibir el título de propiedad y sembrar coca o palma", señala el dirigente William Barbarán.

El ministro de Agricultura también aprovechó el tour a Ucayali para anunciar que la región se convertiría en "productora de soya", un cultivo que ya ha generado estragos en Brasil, Bolivia y Colombia.



La congresista fujimorista Jeny López fue la organizadora del evento donde el ministro Ángel Manero anunció una inyección de palma aceitera en Ucayali.

William Barbarán, presidente de la red de comunicadores indígenas de Ucayali: "Hay gente que ya está invadiendo bosques vírgenes para recibir el título de propiedad y sembrar coca y palma".

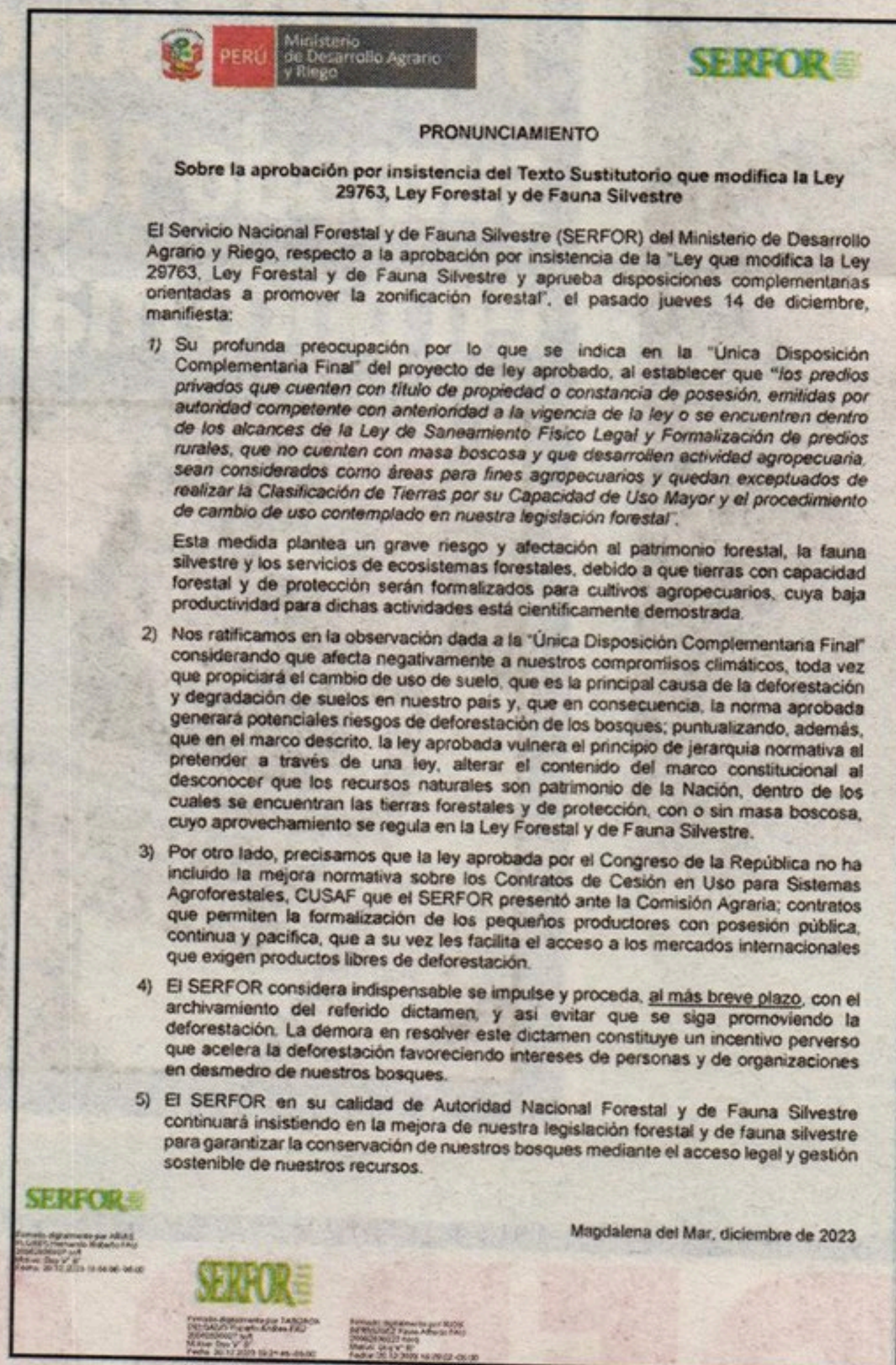
incentivo de depredar bosques para tener mayores extensiones de tierra", dice Alberto Gonzales-Zúñiga, economista y director ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) hasta el 7 de mayo, cuando el gobierno lo despidió por oponerse a la nueva ley forestal.

"Yo ingresé a ese puesto por concurso público en febrero del 2019. Permanecí hasta junio del 2020 cuando la administración de Martín Vizcarra me sacó porque propusimos enfrentar la tala ilegal y quisimos ordenar las concesiones forestales", dice. Gonzales-Zúñiga señala que en octubre del 2022 retomó

la dirección de Serfor gracias a una orden del Poder Judicial.

El exfuncionario explica que a su regreso estableció un plan para combatir la degradación y deforestación de los bosques amazónicos. "(...) Convoqué a un equipo para detectar los factores que contribuían a la deforestación porque han establecido cultivos de palma sobre la base de haber destruido bosques primarios. La empresa Ocho Sur es un ejemplo de ello", explica el experto.

El exdirector de Serfor propuso un plan para llegar a un acuerdo con los agricultores. "Nuestro planteamiento era detener el avance de la agricultura ofreciéndoles prolongar



el tiempo de sus concesiones y asistencia técnica", dice Gonzales-Zúñiga.

En mayo del 2023 la Unión Europea anunció que para fines de este año dejaría de importar productos obtenidos de la deforestación o de plantaciones ilegales.

El exdirector de Serfor afir-

mó su plan y se lo presentó a la entonces titular del Midagri, Nelly Paredes. Allí comenzaron los problemas. "Dentro del ministerio nos sabotearon. El viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar, Christian Barrantes Bravo, y el ahora ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, convocaban a

El pronunciamiento que Alberto Gonzales-Zúñiga redactó como director de Serfor para protestar contra la aprobación de la nueva ley forestal. El Ejecutivo vetó el documento.